

Consulta pública previa sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modificaría el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de Costas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se abre periodo de consulta a interesados, a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para recabar la opinión de los sujetos potencialmente afectados de manera previa al inicio de los trámites para la aprobación de un real decreto por el que se modificaría el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

De acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015 y el artículo 26 de la Ley 50/1997, se recaba información acerca de los siguientes aspectos:

- a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- c. Los objetivos de la norma.
- d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los comentarios y contribuciones podrán remitirse a través de la dirección de correo electrónico: buzon-sgdpmt@miteco.es indicando en el asunto “Consulta pública previa real decreto modificación Reglamento General de Costas”.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté plenamente identificado (nombre completo y DNI para personalidad física o denominación de la entidad y NIF para personalidad jurídica). Con carácter general las respuestas se considerarán no confidenciales y de libre difusión. Las partes que se consideren confidenciales deberán ser específicamente señaladas y delimitadas en los comentarios, motivando las razones de dicha calificación.

Los resultados extraídos de esta fase de consulta serán tenidos en cuenta en el diseño de la norma.

Este proceso de consulta previa no reemplazará a ninguna audiencia ni información pública previa a la publicación definitiva de la normativa asociada a esta declaración. Por ello, una vez redactado el borrador completo de la norma, se someterá a audiencia e información pública según lo recogido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Antecedentes y problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

En abril de 2021, la Comisión Europea inició el EU PILOT 2021/9949 titulado “Solicitud de información a las autoridades nacionales sobre el marco jurídico aplicable a las «concesiones» marítimas en España”. Tras dos contestaciones del Reino de España exponiendo el ajuste de la legislación de costas a la normativa europea, en febrero de 2023 la Comisión Europea consideró insuficientes las justificaciones y abrió un procedimiento de infracción a España por incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios).

El texto de la nota de prensa de la Comisión sobre este procedimiento fue el siguiente:

“La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras. Además, según la Comisión, la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta setenta y cinco años sin justificación es contraria a las normas de la UE.

La Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar «concesiones» («autorizaciones» en el sentido de la Directiva de servicios) para construir locales permanentes (por ejemplo, restaurantes, agrogranjas, empresas papeleras o químicas, etc.) en el denominado «dominio público marítimo-terrestre», fuera de los puertos, sin llevar a cabo un procedimiento de selección abierto y transparente. También permite ampliar la duración de tales concesiones por un período de hasta setenta y cinco años, una vez más sin procedimiento de selección alguno. Esta Ley infringe la Directiva de servicios.”

Con fecha 16 de diciembre de 2024, la COM emitió Dictamen motivado, cuya conclusión es la siguiente: *“de conformidad con el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al adoptar y mantener en vigor los artículos 42, 74, 75 y 81 de la Ley de Costas, el artículo 2 de la Ley 2/2013 y los artículos 152, 156, 158, 170 y 172 del Reglamento General de Costas (tanto en la versión actualmente en vigor como en la versión que incorporaba los cambios introducidos por el Real Decreto 668/2022), el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva de servicios y, con carácter subsidiario, del artículo 49 del TFUE”.*

Necesidad y oportunidad de su aprobación

Tras las oportunas reuniones con los servicios de la Comisión Europea para tratar este procedimiento de infracción, se ha optado por iniciar la modificación del Reglamento General de Costas para corregir aquellos aspectos de la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que la Comisión consideraba no conformes con el artículo 12 de la Directiva de Servicios. Posteriormente, será necesario abordar las modificaciones legislativas a que hace referencia el Dictamen motivado.

Se hace imprescindible esta modificación para evitar que el procedimiento de infracción (2022)4121 escale a una condena para el Reino de España.

Además, ante la nulidad declarada por Sentencia de 31 de enero de 2024 del Tribunal Supremo del Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, que modificaba algunos errores del Reglamento General de Costas, se hace necesario corregir errores, disfuncionalidades y erratas.

Objetivos de la norma

- Atender las demandas de la Comisión Europea en el procedimiento de infracción (2022)4121.
- Realizar ciertas modificaciones puntuales que obedecen al principio de legalidad y a la necesaria adecuación del Reglamento a la Ley 22/1988, de 28 de julio, con el fin de corregir ciertas disfuncionalidades e incoherencias detectadas en el Reglamento General de Costas de 2014.
- Corregir las erratas detectadas en el Reglamento General de Costas de 2014.

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

No existe alternativa, toda vez que el procedimiento de infracción en curso obliga al Reino de España a esta modificación normativa.

La única solución alternativa posible de carácter no regulatorio, la aprobación de planes o estrategias específicas sobre la costa y el mar, sin carácter normativo, sería insuficiente para la consecución de los objetivos propuestos.